

Opinión

Historia y verdad oficial



Juan Ignacio Brito

Periodista

COMO MUCHOS, crecí escuchando que Chile era país de historiadores. Barros Arana, Amunátegui, Encina, Eyzaguirre y Ramírez Necochea, por nombrar a algunos de los más destacados, contribuyeron a que conociéramos y nos formáramos una idea sobre el pasado. Ellos y muchos de sus colegas ayudaron a educar nuestra conciencia histórica y nos permitieron entender que, según escribió T.S. Eliot, "el tiempo presente y el tiempo pasado son ambos quizás presente en el tiempo futuro, y el tiempo futuro está en el tiempo pasado".

Los que, como ávidos aficionados, nos acercamos a los textos de los historiadores, agradecemos que sus perspectivas sean variadas, sus metodologías distintas y sus énfasis diferentes, porque sobre el pasado hay visiones encontradas. Esto lo sabemos bien los chilenos, en especial en lo que se refiere a nuestra historia más próxima, lle-

na de violencia política y abierta, como toda época, al debate histórico entre posiciones contrapuestas.

Por lo mismo, llama la atención que nadie cuestione que, en los hechos, se haya ido construyendo una versión única de ese período. Una perspectiva que queda bien representada por las palabras de la senadora Isabel Allende, quien el fin de semana dijo que, a través de la investigación que realiza el juez Mario Carroza, "el Poder Judicial va a establecer una verdad histórica, oficial" sobre el suicidio de su padre, el 11 de septiembre de 1973. La parlamentaria propone así judicializar la historia y fijar una versión gracias al sello oficial que le otorgaría la resolución del magistrado.

Por supuesto, no es tarea de un poder del Estado establecer verdades históricas. Aquí, como ocurre también en otras materias, los tribunales aprovechan un vacío dejado por otros.

Existe poca investigación histórica de calidad sobre el período de la violencia política en Chile, que abarca desde los 60 hasta los 90, cuando fueron desarti-

No es tarea de un poder del Estado establecer verdades históricas. Respecto de 1973, los tribunales aprovechan un vacío dejado por otros.

culados grupos como el FPMR y el Mapu Lautaro. Nadie parece querer tomar esa papa caliente.

Esto les sucede no sólo a los historiadores, sino también a algunos sectores políticos. El grueso de la derecha se avergüenza de su colaboración con el régimen militar y se ha restado del debate. Con su habitual desprecio por las ideas y proverbial pragmatismo, estima que esta no es una batalla necesaria, más aún si puede quitarle votos u obligarla a defender posiciones difíciles. A la DC y sus líderes sí les importa el pasado, pero para tratar de convencernos de que no hicieron lo que hicieron. Eso despeja la pista para la izquierda, que ha construido el "relato" (para usar una palabra de moda) sobre el período casi sin oposición y que hoy pone la guinda a la torta exigiendo que el Poder Judicial defina la versión oficial sobre el 11 de septiembre de 1973, fecha pivotal del período en cuestión.

El pasado, el único lugar donde todos hemos estado de alguna manera, deja de cumplir así uno de sus roles clave: ayudar a formar la conciencia histórica nacional. Se ha convertido en bandera de lucha política de un sector que busca manejarlo como un monopolio, alentado por el abandono de la mayoría de los expertos y la deserción de algunos grupos intimidados. ¿Dónde quedó el país de historiadores?